

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

A LA LICENCIADA [REDACTED] EN CALIDAD DE APODERADA DEL
TITULAR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES Y A TRAVÉS DE SU OFICIAL DE
INFORMACIÓN

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación **NUE 31-A-2020 (RG)**, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 30 de abril de 2021, ha pronunciado la resolución que literalmente **DICE:**.....



NUE 31-A-2020 (RG)

Recurso de apelación

**[REDACTED] contra Centro Internacional de Ferias y Convenciones -CIFCO-
Resolución Definitiva**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con un minuto del treinta de abril de dos mil veintiuno.

Descripción del caso

I. El presente procedimiento fue promovido por [REDACTED], en adelante “la parte apelante” o “el apelante”, en contra de la resolución emitida por la oficial de información del **Centro Internacional de Ferias y Convenciones**, en adelante “**CIFCO**” o “ente obligado”, bajo la referencia número 04 OIR - 31/01/2020, de fecha 31 de enero del año dos mil veinte.

De acuerdo a su recurso de apelación, el apelante manifestó que requirió la siguiente información: “*La nómina de todos los empleados que la referida institución tenía, actualizada hasta el 13 de enero de 2020, incluyendo nombre completo del empleado, cargo, salario asignado, modalidad de pago (por ley de salario o por contrato), lugar donde desempeña su trabajo y fecha de contratación*”.

Al respecto, el oficial de información resolvió que según lo establecido en el Art. 74 literal b) de la LAIP, cuando la información se encuentre disponible, el oficial de información le indicará al peticionario la ubicación de la misma. En ese sentido, el oficial de información le proporcionó 2 enlaces donde se encuentra la información solicitada. En cuanto a la inconformidad del apelante, este manifestó que dichos enlaces no contienen el nombre completo de cada funcionario o empleado, el salario asignado a cada uno y la fecha de contratación.

II. Este instituto admitió el recurso de apelación incoado por el ciudadano y se designó al Comisionado Ricardo José Gómez Guerrero para que instruyera el presente procedimiento y elaborara el proyecto de resolución definitiva. De igual forma, en plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se le corrió traslado a **CIFCO** para que rindiera su informe justificativo.

En dicho informe, el ente obligado manifestó -en lo medular- que estaban dispuestos a entregar la información solicitada por el ciudadano [REDACTED], con excepción de los salarios que percibe cada uno de los trabajadores de dicha entidad debido a que consideran que la misma es información de carácter confidencial con base al Art. 6 literal f de la LAIP. Asimismo, alegan que el no proporcionar dicha información no responde a la intención de ocultar u obstruir el acceso a la información del ciudadano, sino que se limita a la intención de salvaguardar la seguridad de los trabajadores del ente obligado, evitando que sean víctimas de actos de extorsión y otra manifestación que implique seguridad personal.

Por otra parte, cabe mencionar que durante la tramitación del presente procedimiento de apelación, ninguna de las partes aportó prueba que no constara en el expediente administrativo del caso.

III. El día 20 de enero del corriente año, se llevó a cabo la celebración de la audiencia oral del caso con la participación del apelante y la representación del ente obligado, Susan Eneida Calderón López, en su calidad de apoderada general judicial de **CIFCO**.

En ese sentido, en la fase de alegatos, el apelante manifestó -en lo medular- que reitera la petición contenida en su recurso de apelación, en el sentido de que se le entregue la información, tal cual fue solicitada en su requerimiento. De igual forma, señaló que la información solicitada

no pone en peligro la vida o la integridad de los funcionarios de **CIFCO**. Asimismo, indicó que existen suficientes criterios para exigir la información, que es objeto de controversia de la misma.

Por otra parte, en cuanto a los alegatos brindados por la representación del ente obligado, se expuso -en lo medular-, que se ratificaba todo lo actuado por la oficial de información, argumentando que la información requerida contenía dos elementos: en primer lugar, contenía información oficiosa la cual le fue entregada al ciudadano los link que remiten a la información consistente en: cargo, número de empleados, remuneración y categoría salarial; así como toda la información pertinente a los asesores de CIFCO; y, en segundo lugar, manifestó que los nombres de los servidores públicos de dicha institución es información de carácter confidencial, ya que son considerados datos personales; por ello, dicha información no fue entregada.

Análisis del caso

Con base a lo argumentado por las partes, este Instituto fija el objeto de controversia del presente caso en la entrega de la información relacionada a: *El nombre completo de cada funcionario o empleado de CIFCO, el salario asignado a cada uno y la fecha de contratación.*

En este sentido, el análisis jurídico del presente caso seguirá el *íter* lógico siguiente: **I)** Breves consideraciones del principio de máxima divulgación y sus efectos; **II)** Breves referencias con respecto a la información pública e información pública oficiosa; **III)** Aplicación al presente caso de lo mencionado en el romano anterior referente a los salarios y la fecha de contratación de los servidores y funcionarios públicos; y, **VI)** Análisis sobre la información confidencial en su dimensión datos personales como límite al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), en relación a los nombres de los empleados y funcionarios públicos.

I. Tal como ya lo ha sostenido este Instituto, el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe

estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son: a) El derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) La carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación.⁷

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII- O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI- RES_147_LXXIII- O- 08.p

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem.

⁷ Ídem.

II. Con base a lo anterior, es importante mencionar que dentro del ámbito del derecho de acceso a la información pública existe información que es considerada pública e información que es considerada pública oficiosa.

En este contexto, se debe definir el término de **información pública**. Para ello, la LAIP en su artículo 6 letra “c” determina que: “es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título”.

Por otro lado, de conformidad al principio de transparencia activa, existe cierto tipo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, surgiendo así la categoría de información **pública oficiosa**, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 de la LAIP.

III. Dicho lo anterior y en análisis con el presente caso, cabe mencionar que la naturaleza de la información relativa a *los salarios y fecha de la contratación de los empleados públicos* constituyen información pública oficiosa, de conformidad a los numerales 5 y 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación al Art. 1 1.5 y 1.7 Lineamiento 2 para la Publicación de Información Oficiosa.

En este sentido, la **remuneración mensual por cargo presupuestario**, al ser información pública oficiosa, debe estar a disposición del público sin necesidad de requerir al ente obligado (en este caso **CIFCO**) su divulgación. Esto es así porque las remuneraciones o salarios de los empleados públicos provienen de recursos públicos, por lo que su publicación facilita la fiscalización ciudadana del ejercicio de la función pública y el deber de rendir cuentas de quienes la ejercen.

Bajo ese argumento, en cuanto a la fecha de contratación de los funcionarios y servidores públicos -objeto de controversia del presente caso- es importante mencionar que la misma se considera información pública, misma que se encuentra en poder de la administración pública -en este caso de **CIFCO**- por los procedimientos de selección y contratación de personal que realiza dicho ente obligado.

IV. Ahora bien, sobre este punto, este Instituto ha sostenido en reiteradas ocasiones que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el principio más relevante es el de máxima publicidad o máxima divulgación, mismo que fue explicitado al inicio del presente análisis del caso.

En tal sentido, una de las consecuencias más significativas de este principio establece que, en esencia, la información que haya sido producida por el Estado o se encuentre en su poder o administración es pública, **salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley**. En esa línea, la carga de la prueba sobre la aplicación y justificación de restricciones al derecho de acceso a la información le corresponde al ente obligado.

De lo anterior se desprende, que la naturaleza de información en poder de entidades estatales es por regla general pública, salvo que concurra una causa legalmente justificada que impida que ésta sea proporcionada a los ciudadanos; es decir, el referido principio reconoce que el DAIP puede tener límites bajo el cumplimiento de tal premisa.

En ese mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha establecido que la mera presencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico trae consigo que muchas leyes incidan sobre ellos, regulando su ejercicio o restringiendo su contenido en distintos supuestos. Así, los derechos fundamentales son a la vez límite frente a la ley y objeto de regulación de la misma. Claro ejemplo de ello es la idea que el legislador es una garantía de los mismos a través de la reserva de ley y la determinación normativa⁸.

De ese modo, **los límites a los derechos fundamentales se encuentran establecidos por el legislador en la ley que regula el ejercicio del derecho o una ley en sentido formal**. Para el caso del DAIP, la LAIP regula algunos límites al derecho, en tanto el legislador clasificó la información en poder del Estado de la manera siguiente: información pública, pública oficiosa, información reservada e información confidencial, constituyendo las últimas dos clasificaciones excepciones al DAIP: la primera de ellas, con carácter temporal, y la segunda, perpetua -de manera excluyente-. Es decir, **debe entenderse que la información confidencial es una exclusión directa de la información pública**; contrario es el caso de la información reservada que, sin dejar

⁸ Sentencia Definitiva de Inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el día 12 de abril de 2007, en el proceso de referencia 28-2006/33-2006/34-2006/36-2006.

de ser pública, la restricción a su divulgación es temporal, entendiéndose que eventualmente será de conocimiento general, a diferencia de la información confidencial.

Acotado lo anterior, dado que en el presente procedimiento la excepción alegada por parte del ente obligado para no proporcionar la información ha sido la confidencialidad de la misma, sobre la base de lo dispuesto en el art. 6 letra “f” de la LAIP, en su dimensión datos personales, y a efecto que el análisis de la limitante alegada por el ente obligado y el pronunciamiento que se derive de este posea una fundamentación lógica, debe comenzarse indicando que la controversia que se suscita en este caso ha sido ya resuelta en reiteradas ocasiones por este Instituto, de tal manera que se ha logrado configurar un criterio que sostiene que el nombre de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, es información pública; dicho de otro modo, cuando una persona solicita información relativa al nombre de funcionarios o empleados públicos se tiene que entregar la información sin restricción alguna⁹.

Asimismo, se ha establecido que el ente obligado tiene el deber de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres, como regla general, de personas que no son servidoras públicas o cuando existan situaciones que se enmarquen en alguna causal del art. 19 o 24 de la LAIP, debiendo fundamentar conforme a los parámetros establecidos en la ley antes referida.

El anterior criterio encontraba su fundamento no en razón expresa de lo que regula la LAIP, sino en un análisis de ponderación del DAIP como derecho fundamental, pues conocer dicha información favorece la controlaría ciudadana y facilita verificar que los servidores públicos realizan sus funciones públicas de forma eficiente, eficaz; en tanto, si bien el nombre de los servidores constituye un dato personal que le pertenece, el IAIP ha resuelto que su publicidad no afecta la esfera íntima del individuo, sino por el contrario, contribuye a garantizar el DAIP en la forma indicada.

Ahora bien, lo anterior no obsta a que el pronunciamiento planteado sea inapelable o inamovible; es decir, que no sufra modificaciones derivadas del control posterior al que pueden ser sometidas las resoluciones emitidas por entes de naturaleza administrativa, o, mediante mecanismos reconocidos por la jurisprudencia constitucional como válidos para que los Tribunales

⁹ Resolución definitiva del procedimiento de apelación ref. 128-A-2014, del 19 de noviembre de 2014

fundamenten el cambio de un precedente, como: (i) estar en presencia de un precepto normativo cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; (ii) el cambio de conformación subjetiva del Tribunal y (iii) que los fundamentos fácticos que le motivaron hayan variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada¹⁰.

No obstante lo anterior, para el presente no se ahondará en los supuestos reconocidos para el cambio de criterio, puesto que la interpretación desigual de la norma -LAIP- en el presente no tiene su origen de sustento en este Pleno, sino que deriva del control de legalidad al que se encuentran subordinados los actos administrativos dictados por este Instituto; que para este caso, responde a la decisión adoptada por el máximo tribunal en la materia, es decir, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

En esa línea, para dilucidar la controversia se aclara que este Instituto, respetuoso de los sistemas de control del acto administrativo, se apegará al pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo (en adelante SCA) -como máximo intérprete en materia contencioso administrativa- en la resolución marcada con la referencia 21-20-RA-SCA, dictada la once horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en donde la referida autoridad sobre el objeto de la controversia en este procedimiento determinó:

*“[...] el carácter de servidor público de los empleados (...), no es motivo suficiente para excluir la protección de sus datos personales puesto que tal, como se desarrollará en el siguiente apartado, los empleados públicos, a diferencia de los funcionarios, **no poseen una facultad decisoria ni directiva dentro de la institución pública que justifique la divulgación pública de sus datos personales.***

*Esto no quiere decir que nunca se podrá acceder y entregar los datos personales de los empleados públicos; al contrario, según la misma LAIP, su divulgación es procedente **con el consentimiento libre y expreso del titular, o bien sin el consentimiento del mismo, procede su entrega en el caso y formato prescrito en el art. 34 de la LAIP [...]**”* (Las negritas son nuestras).

Aunado a lo anterior, con la finalidad de esclarecer el razonamiento citado, la referida Sala también retomó la diferencia entre empleado público y funcionario abordada en la sentencia

¹⁰ Sentencia de Amparo emitida por la Sala de lo Constitucional el día 14 de febrero de 2018, en el proceso de referencia 74-2016.

emitida a las once horas con cuarenta y nueve minutos del trece de marzo de dos mil veinte, en el proceso de apelación con referencia: 1-20-RA-SCA de la manera siguiente:

“El funcionario se define por expresar voluntad del Estado, de ahí que sea representativo de este y ostenta poder de decisión frente a los particulares [...].

Por su parte, los empleados públicos, carecen de poder de decisión, estos se perfilan como meros ejecutores de instrucciones, por ello, las expresiones que efectúen no forman parte de la voluntad o representación del Estado [...].

En específico, sobre los funcionarios públicos la LAIP ha determinado que es información pública de divulgación oficiosa relativa al directorio y currículo de los funcionarios públicos incluyendo su correo electrónico institucional.

Por tanto, en virtud del poder de decisión y su principal trascendencia en las actuaciones estatales, si se justifica que el derecho a la protección de datos personales frente al del interés público de conocer tal información.”

Sobre la base de tal premisa, la Sala concluyó que la información relativa a los nombres y demás información concerniente a los empleados públicos, **aun y cuando sus labores de colaboración tienen una incidencia en el ejercicio de la función pública, las mismas siempre se encuentran supeditadas a la decisión final y exclusiva de los funcionarios**, por lo que, dicha circunstancia no denota una razón suficiente para vulnerar el derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos. De ese modo, reiteró que dichos datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares de los datos -empleados públicos- o en los casos contemplados en el art. 34 de la LAIP.

La distinción que realiza la Sala de lo Contencioso Administrativo respecto a cuáles son los servidores públicos a los que la ley de la materia habilita expresamente la divulgación de su nombre (dato personal), con base a la reciente jurisprudencia, privilegia el derecho a la protección de datos personales (DPDP) sobre el derecho de acceso a la información pública; lo cual, tiene sus cimientos en la premisa desarrollada al inicio de esta resolución, es decir, a que la restricción de un derecho fundamental (como lo es el de DPDP) debe estar determinada expresamente por la ley formal pues las actuaciones de la administración pública se rigen por el principio de legalidad.

De conformidad a este y según lo establece el artículo 86 de nuestra Constitución, puede perfectamente afirmarse que este es el principio rector de la administración pública; por lo

que toda su actuación ha de apegarse necesariamente como ejercicio de un poder atribuido previamente por ley, la que lo construye y delimita. Lo anterior significa que, las entidades administrativas -incluido este Instituto- deben someterse en todo momento a lo que la ley establezca, entendiendo tal expresión como indicativa -por lo específico del análisis- del concreto sistema del derecho administrativo que rige en un ordenamiento jurídico dado. Doctrinariamente, el autor Rafael Entrena Cuesta en su libro "Curso de Derecho Administrativo", manifestó que: "ha hecho fortuna la expresión según la cual la Administración habrá de someterse, no ya a la ley, sino a todo el bloque de la legalidad". Este sometimiento se consigue mediante la instrumentación de una serie de técnicas cuya elaboración corresponde al derecho administrativo que, como se sabe, está edificado -de acuerdo con Entrena Cuestas- "sobre los dos pilares de la prerrogativa de la Administración y la garantía de los administrados".

Es por ello que, en el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, se advierte que la LAIP, siendo una ley formal, restringe expresamente y con modulaciones el derecho fundamental a la protección de datos personales de los funcionarios públicos (Art. 10 numeral 3 de la LAIP) y no así en el caso de los empleados. En ese contexto, esa Sala ha diferenciado básicamente a los funcionarios por expresar la voluntad del Estado, de ahí que sea representativo de este y ostenta poder de decisión frente a los demás servidores públicos que integran la institución, entendiéndose entonces que los funcionarios de la administración pública son únicamente los titulares (máxima autoridad) de estas; mismos que instruyen a los empleados respecto de las acciones a realizar. Es bajo esa lógica que la Sala de lo Contencioso Administrativos afirmó que los empleados públicos se perfilan como meros ejecutores de instrucciones, por ello, las expresiones que efectúen no forman parte de la voluntad o representación del Estado, pues se limitan a realizar las ordenes encomendadas por los titulares de la institución.

En ese orden, con la intención de contar con claridad de lo resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo, este Instituto interpuso solicitud de aclaración sobre algunos puntos de la sentencia antes citada, específicamente sobre la interpretación de la referente a la publicidad de los nombres de los servidores públicos, indicando lo siguiente:

"[...] Los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende, información confidencial."

*[...] La difusión o entrega de información pública que guarde relación en el ejercicio de las funciones de los **empleados públicos** dentro de la institución, no implica que deben compartirse el nombre y otros datos personales de los referidos empleados”¹¹.*

La interpretación aludida deviene del derecho a la protección de datos personales, categoría que goza de una especial protección en nuestro ordenamiento jurídico.

Entonces, para el caso en comento, se advierte que el apelante requirió a **CIFCO** la información consistente en: la nómina de todos los empleados que la referida institución tenía, actualizada hasta el trece de enero del año dos mil veinte, incluyendo nombre completo del empleado, cargo, salario asignado, modalidad de pago (por ley de salarios o contrato), lugar donde desempeña su trabajo y fecha de contratación. No obstante, el apelante manifestó su inconformidad únicamente respecto del nombre completo de los funcionarios y empleados, el salario asignado a cada uno y la fecha de contratación; por lo que, el análisis se ha circunscrito únicamente con respecto a estos puntos.

En consecuencia, este Instituto como ente garante del DAIP y del Derecho a la Protección de Datos Personales (DPD), pero sobre todo de la legalidad de sus actos sujetos a control jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Constitución de la República, para el caso, a través de la jurisdicción contencioso administrativa -art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa-, considera oportuno adoptar la interpretación emitida por la referida Sala, pues resultaría contradictorio, antojadizo y arbitrario emitir fallos alejados del criterio de la máxima intérprete en materia administrativa. Por consiguiente, es procedente modificar la resolución impugnada en esta sede, de referencia 04 OIR - 31/01/2020, emitida por la oficial de información de **CIFCO** a las cuatro horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero de dos mil veinte, de conformidad a los argumentos expuestos en la presente resolución.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, el principio de integridad de la información y los arts. 6 y 18 de la Cn, 52 inciso 3º, 58 letras “b”,

¹¹ Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, solicitud de aclaración dictada a las trece horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, en el proceso con referencia: 21-20-RA-SCA.

“d” y “g”; 94, y 96 letra “d” de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) **Modificar** la resolución emitida por la oficial de información de **CIFCO**, bajo la referencia número 04 OIR - 31/01/2020, de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar** al **titular** de **CIFCO** que, a través de su oficial de información o a quien este designe, entregue a [REDACTED] la información concerniente en: remuneraciones y la fecha de contratación por cada cargo presupuestario. **En el caso de los nombres de los empleados públicos, sino mediara el consentimiento de éstos, se deberá omitir la entrega de dicho dato.** Toda esta información deberá ser entregada actualizada al trece de enero del año dos mil veinte, tal cual lo fue requerido por el apelante.

c) **Requerir** al **titular** de **CIFCO** que, en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de finalizado el plazo estipulado en la letra c) de esta parte resolutive, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) **Hacer saber** a las partes, que contra este acto no cabe recurso en esta sede administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente procedimiento a la Unidad de Cumplimiento para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-

-----ILEGIBLE-----AGREGORI-----ILEGIBLE-----
-PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN"RUBRICADA"